

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE : FRANCISCO JAVIER GIRALDO BOTERO
DEMANDADO : COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL: 05-001-31-05-020-2022-00439-01
RADICADO INTERNO : 332-23
DECISIÓN : CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO : 368

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se CONDENE a Colpensiones a reconocer y pagar el retroactivo de la pensión de invalidez del 3 de julio de 2020 al 31 de marzo de 2022; al pago de los intereses moratorios por la demora en el reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión de invalidez; al pago de la indexación sobre la suma de dinero reconocida por concepto de los intereses moratorios; y la condena en costas procesales a la demandada.

Fundamentó sus pretensiones en que, el actor tuvo incapacidades en forma discontinua, y el pago de la última incapacidad fue hasta el 27 de abril de 2020; el demandante fue calificado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y determinó que contaba con una pérdida de capacidad laboral del 57,87%, estructurada el 3 de julio de 2020.

Que solicitó la pensión de invalidez el 22 de noviembre de 2021; por medio de la resolución SUB-69071 del 10 marzo de 2022, se le reconoció la prestación económica solicitada, a partir del 1º de abril de 2022, sin que se hiciera el reconocimiento del retroactivo pensional. El demandante interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación, el 16 de marzo de 2022 y solicitó el reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión de invalidez desde el 3 de julio de 2020, que corresponde a la fecha de estructuración y mediante resolución SUB-132437 del 16 de mayo de 2022 se confirmó el acto administrativo anterior argumentando que el certificado de incapacidades expedido por la NUEVA EPS no cumple con los requisitos que demuestra su autenticidad.

Y expone que el demandante radicó nueva solicitud de retroactivo pensional el 24 de mayo de 2022 y en resolución SUB-24795 del 9 de septiembre de 2022 negó nuevamente la solicitud elevada. Sostiene que tiene derecho al reconocimiento del retroactivo pensional y que, al hacer las liquidaciones provisionales, le adeudan un total de \$ 21.867.681 y por concepto los intereses moratorios hasta el 31 de octubre de 2022, la suma haciendo \$3.762.656.

RESPUESTA A LA DEMANDA

La accionada Colpensiones en su contestación indicó que no le consta el pago de las incapacidades al actor; que el demandante tenga derecho al retroactivo pensional desde el 3 de julio de 2020; ni los valores que calculó se le adeudan por Colpensiones. Frente a los demás hechos de la demanda, manifestó que son ciertos. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar retroactivo de pensión de invalidez, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, prescripción, innominada, compensación, imposibilidad de condena en costas y buena fe de Colpensiones (expediente digital 06).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 11 de octubre de 2023, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que al demandante le asiste el derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional por invalidez desde la fecha de su estructuración, ello es, desde el 3 de julio de 2020.

CONDENÓ a Colpensiones, a reconocer y pagar al actor, la suma \$20.867.679, por retroactivo de la pensión de invalidez, causado entre el 3 de julio de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022. AUTORIZÓ a Colpensiones a descontar del retroactivo, lo correspondiente al aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Régimen Contributivo. Condenó a Colpensiones a reconocer y pagar los intereses moratorios, liquidados desde el 23 de marzo de 2022, sobre el valor del retroactivo pensional, saldados al momento en que se efectuó el pago, liquidados teniendo en cuenta el momento en que se hizo exigible cada una de las mesadas objeto de retroactivo; y condenó en costas a Colpensiones.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de la parte demandada apeló la sentencia expresando que la NUEVA EPS emitió certificado de incapacidad expedida el 18 de noviembre de 2021, sin embargo, dicho certificado corresponde a un certificado digital con el cual no se podía generar la prestación; así mismo manifiesta que se acoge a los conceptos de la entidad, en el que se establece que los certificados de incapacidades descargados de portales de internet que son aportados para tramitar el pago de las incapacidades como medio probatorio, por si solos no son válidos ni oponibles a Colpensiones y dichos documentos serían válidos si se desprende su autenticidad, integridad e inalterabilidad, estando sujeto a la verificación para determinar su autoría.

Que no comparte lo expuesto por el A Quo en la sentencia, relacionado con este tema, porque no existe una información en línea en donde las entidades del sistema puedan verificarla, siendo carga del actor presentar la prueba; así mismo resalta la existencia en el proceso, de un certificado de incapacidad del 23 de marzo de 2022, con el que se determina que el actor cuenta con incapacidades posteriores a la fecha de estructuración. Asegura que al demandante se le informó que debía allegar un nuevo certificado emitido por la NUEVA EPS, cumpliendo las formalidades legales, a efectos de realizar el nuevo estudio del retroactivo pensional sin que el demandante lo haya aportado; hace referencia en su recurso, a las obligaciones que tienen los usuarios que cumplir sin que el demandante lo haya agotado y la entidad no puede reconocer una prestación sin el cumplimiento de los requisitos, porque incurriría en un delito dado que Colpensiones administra recursos públicos parafiscales.

En segundo lugar, solicita se revoque la condena de pagar intereses moratorios, dado que en la sentencia T 281 de 2011, la corte indicó que estos operan cuando existe una pensión reconocida y la entidad encargada de realizar el pago haya incurrido en mora en forma injustificada, y en este evento el actor siempre ha recibido su mesada pensional; y frente a los dineros objeto del proceso, se llevó un proceso administrativo y el trámite legal.

Finalmente solicita que no haya condena en costas a cargo de Colpensiones, teniendo en cuenta los preceptos de buena fe y legalidad con los que actuó la accionada.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de Colpensiones, reitera lo manifestado en el recurso de apelación, y adiciona que Colpensiones negó el reconocimiento del retroactivo de la pensión de invalidez por no acreditarse en debida forma, que el accionante no haya recibido pago por incapacidades emitidas con posterioridad a la fecha de estructuración, conforme lo indica la Circular 01 de 2012; asegura que el disfrute de la pensión de invalidez sería a partir de corte de nómina que lo fue el 1º de abril de 2022, esto es a corte de nómina, al haberse aportado certificado del 1º de agosto de 2008 por la NUEVA EPS, que no cuenta con nombre ni cargo del funcionario que la expide. Sustenta sus alegatos, con el Concepto 2006026318-001 del 10 de julio de 2006 de la Superintendencia Financiera, y concepto 1217 de 2006 del Ministerio de la Protección Social.

Que no está a cargo de Colpensiones reconoce la prestación, sino que la prueba documental está en cabeza del titular del derecho, al ser el único que posee la facultad de desvirtuar los hechos y/o documentos conforme lo establece el art 177 del CPC (sic) por remisión del art. 267 del CCA.

Expresa que el certificado de incapacidades del 23 de marzo de 2022 expedido por la EPS NUEVA EPS, se evidencian incapacidades pagas hasta el 27/04/2020, y en estado transcrito el periodo del 14/02/2022 al 15/03/2022, pero el certificado cuenta con más de 3 meses de expedido requiriéndose la actualización del mismo para estudiar el retroactivo solicitado, y en ese sentido, se niega el reconocimiento del retroactivo de una pensión de invalidez hasta que se allegue el certificado; desde que el afiliado fue requerido para aportar nuevo certificado y hasta la fecha, no ha aportado el certificado con las correspondientes declaraciones de pago o no pago por la EPS.

advierte que el certificado de incapacidades allegado, no se evidencian incapacidades prolongadas, continuas ni superiores a los 180 días, desde el año 2018, razón por la cual la obligación de pago se encuentra en cabeza de las EPS.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico se centra en determinar en virtud del recurso de apelación:

i) Si el demandante tiene derecho al reconocimiento del retroactivo pensional desde la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral; ii) Si tiene derecho a los intereses moratorios; y iii) Si hay lugar a revocar las costas procesales.

En virtud del grado jurisdiccional de consulta y en caso de ser confirmada la sentencia, se deberá analizar: i) El valor del retroactivo pensional reconocido; ii) Y la fecha a partir de la cual se reconocieron los intereses moratorios.

1. Del retroactivo de la pensión de invalidez

Se encuentra acreditado en el plenario y no es objeto de discusión que el demandante fue calificado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y en dictamen del 17 de noviembre de 2021 se encontró una pérdida de la capacidad laboral del 57.87% con fecha de estructuración del 3 de julio de 2020 (fls. 15 a 28 del expediente digital 01); el demandante solicitó la pensión de invalidez el 22 de noviembre de 2021 (fl. 29). Colpensiones profirió la resolución SUB 69.071 de 2022, en la cual reconoció la prestación económica solicitada, a partir del 1º de abril de 2022, ello es, a partir de corte de nómina, aduciendo que se había aportado certificado con fecha del 1º de agosto de 2008 por la NUEVA EPS sin que cuente con el nombre del funcionario que la expidió; también se dijo en la resolución, que al ser incompatible la mesada pensional y el pago de incapacidades, la forma idónea de verificar que no existan pagos simultáneos entre dichos conceptos, era a través del certificado emitido por la EPS; se indicó que los certificados de incapacidades descargados de portales de internet que son aportados para tramitar el pago de las incapacidades o como medio de prueba para solicitar prestaciones económicas, son válidos si se desprende su autenticidad, confiabilidad e inalterabilidad, estando sujeto a la verificación para determinar quién es su autor y ello se acredita a través de la firma electrónica o digital, y en este caso se le indicó al actor que debía allegar certificado de incapacidades de la EPS

debidamente actualizado con el nombre del funcionario que lo expidió y con la respectiva firma digital o electrónica debidamente validada (fls. 35 a 51).

El demandante interpuso los recursos de ley en contra de la resolución emitida y en la resolución SUB-132.437 de 2022 se confirmó el acto administrativo anterior (fls. 50 a 55); el 24 de mayo de 2022, solicitó realizar un nuevo estudio del retroactivo pensional e intereses moratorios (fl. 56); y en resolución SUB-248.795 de 2022 se negó el retroactivo pensional solicitado (fls. 60 a 63).

En primera instancia, se condenó a Colpensiones a reconocer el retroactivo pensional desde el 3 de julio de 2020, teniendo como sustento el art. 3º del Decreto 919 de 1999, art. 40 de la Ley 100 de 1993 y el art. 10 del Decreto 758 de 1990, en donde se señala que la pensión de invalidez se reconoce desde la fecha de estructuración de la invalidez, no obstante, frente al disfrute, aseguró que en caso que el afiliado haya recibido subsidios de incapacidad posteriores a la fecha de estructuración, la prestación se reconoce desde el último periodo en que se reconoció el subsidio por incapacidad, dado que la una de las finalidades de la incapacidad es a nivel económico, y que corresponde a suplir el ingreso que deja de recibir por la inhabilidad física o mental para desempeñar la actividad laboral, el cual se reconoce en forma transitoria y temporal.

Se consideró en la sentencia, que en la certificación de la incapacidad dada por la NUEVA EPS y aportada con la demanda con fecha del 23 de marzo de 2022, plasmó que la última incapacidad reconocida al actor por la EPS tuvo lugar el 28 de abril de 2020, ello bajo el entendido que, en la certificación referida, se estableció que el último subsidio fue reconocido en el periodo comprendido del 18 de abril al 27 de abril de 2020, y pese a encontrarse una orden de incapacidad del 14 de febrero al 15 de marzo de 2022, tiene anotación de “transcrita” pero en ningún momento se reconoció la prestación económica derivada de esa incapacidad por la EPS ni del fondo de pensiones, por tanto, la última incapacidad reconocida al actor, fue anterior a la fecha de estructuración que data del 3 de julio de 2020.

En el mismo sentido, consideró improcedente la negación del retroactivo pensional, dado que el actor había aportado el certificado de subsidio de incapacidad, el cual reposa en el expediente administrativo con fecha del 5 de febrero de 2020 en donde se acreditaba no haber recibido subsidio de incapacidad posteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Frente al

sustento dado por Colpensiones para negar el retroactivo, ello es, porque las certificaciones aportadas no contaban con firmas que acreditaran la autenticidad del documento, rechazando el A Quo la decisión adoptada con fundamento en el art. 244 del CGP pues la certificación emitida por la NUEVA EPS pese a no contar con la suscripción del funcionario, tiene la firma del encargado de Prestaciones Económicas de la NUEVA, y en ese sentido cuenta con los elementos necesarios para considerarlo auténtico y porque Colpensiones tenía la posibilidad de verificar los subsidio que hayan sido reconocidos a sus afiliados, sin que pudiera trasladar la obligación al afiliado.

En este sentido, el art. 40 de la Ley 100 de 1993 relativo al monto de la pensión, reza en su último párrafo: *“La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado”*.

El art. 10 del Decreto 758 de 1990 en concordancia con el art. 31 de la Ley 100 de 1993 aclara aún más el tema al señalar frente al disfrute de esta prestación económica al señalar *“la pensión de invalidez por riesgo común se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse forma periódica y mensual desde la fecha en que se estructure tal estado. Cuando del beneficiario estuvieron en goce del subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio”* y el art. 3º del Decreto 917 de 1999 por medio del cual se define la fecha de estructuración o declaración de la pérdida de capacidad laboral establece que *“... En todo caso mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal no habrá lugar a recibir las prestaciones derivadas de la invalidez”*.

En primera instancia se reconoció la prestación económica en forma retroactiva a partir **del 3 de julio de 2020**, fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral.

Visto lo anterior, al analizar la prueba aportada en su conjunto, para la Sala es claro que el demandante fue calificado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez con una pérdida de la capacidad laboral del 57,87% estructurada el **3 de julio de 2020**; en el fl 188 del expediente digital 06 reposa certificado de incapacidades emitido por la NUEVA EPS el 18 de noviembre de 2021 y en el fl 14 del expediente digital 01, se allegó certificado de incapacidades de la

NUEVA EPS emitido el 23 de marzo de 2022, en los que en forma concordante refleja los siguientes **pagos por subsidio de incapacidades**:

- Por el periodo del 2 de junio al 22 de junio de 2015
- En el año 2017, los periodos comprendidos del 27 al 29 de marzo; del 22 al 24 de julio; del 8 al 9 de agosto; del 14 al 28 de agosto; del 11 al 13 de septiembre; y del 26 de octubre al 4 de noviembre.
- En el año 2018 en los periodos comprendidos del 20 de febrero al 21 de marzo; del 24 de marzo al 7 de abril; del 13 al 22 de abril; del 23 de abril al 4 de mayo; del 5 de mayo al 3 de junio; del 26 de junio al 6 de julio; del 16 de julio al 14 de agosto; del 22 de agosto al 5 de septiembre; del 28 de septiembre al 12 de octubre de 2018
- Y por el periodo comprendido del 18 al **27 de abril de 2020**

Por su parte, de los mismos certificados se extrae, que por los periodos del 19 de julio de 2017 y del 14 de febrero al 15 de marzo de 2022, no aparece reportado el pago de las mismas sino la denominación de “transcrita”, y en la casilla de “valor pagado” aparece reportado “\$0”. Prueba que da lugar a concluir, que el último subsidio de incapacidad percibido por el actor tuvo lugar hasta el **27 de abril de 2020**.

Ahora bien, en principio, la Corte Suprema de Justicia adoptaba la posición donde disfrute de la prestación económica de invalidez se generaba desde la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, y en los eventos donde existía pagos de incapacidades posteriores a la fecha de estructuración, había lugar a ser descontados, pues así se indicó en la sentencia SL 1562 de 2019 cuando señaló:

“Así que, pese a la condición de trabajador dependiente del actor y la existencia de aportes al Sistema General de Pensiones con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, esta Sala ha indicado con anterioridad (ver sentencia SL619-2013), que ello no desvirtúa el reconocimiento retroactivo del derecho pensional desde que se estructuró el estado de invalidez. En esos términos, no se equivocó el ad quem al señalar que la concurrencia de estas específicas circunstancias (continuidad en la prestación del servicio y cotización al Sistema General de Pensiones), no desvirtúan lo establecido en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, es decir, que el reconocimiento de la pensión de invalidez se haga desde la estructuración.

Ahora bien, en lo que atañe a la incompatibilidad entre el pago de mesadas pensionales y subsidios por incapacidad temporal, el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, establece que: (...)

De cara a lo establecido en el citado precepto, estima la Sala que el juez de apelaciones tampoco lo desconoció ni le dio un entendimiento erróneo, pues, por el contrario, al descontar del pago del retroactivo pensional los periodos de subsidios por incapacidad temporal, procuró armonizar lo establecido en el decreto enunciado con las restantes disposiciones de la Ley 100 de la 1993, que ordenan el reconocimiento de la prestación desde el momento de estructuración de la invalidez y salvaguardar el propósito indiscutible de auxilio.

*Al respecto, se insiste en que el citado artículo 40 de la Ley 100 de 1993 **es claro en indicar que la pensión de invalidez por riesgo común debe otorgarse, de manera retroactiva, a partir de la fecha en que se produce el estado de invalidez**, es decir, desde cuando la pérdida de la capacidad laboral alcanza un porcentaje igual o superior al 50% (artículo 39 de la Ley 100 de 1993). De lo que se deriva que el legislador en el citado precepto no estableció ni explícita ni tácitamente, condición alguna, diferente al estado de invalidez, para proceder al reconocimiento del derecho pensional desde la fecha de estructuración. (...)*

*De modo que, como bien lo dedujo el Tribunal, de cara a la incompatibilidad establecida en el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, **cuando, como en el presente asunto, el retroactivo pensional cubija periodos que también han sido cubiertos por subsidios por incapacidades temporales, la prohibición de que trata el citado decreto, a lo sumo, conduciría a la imposibilidad de que se disfruten o perciban, a la vez, la mesada pensional y el subsidio por la incapacidad, pero no a la imposibilidad del reconocimiento del derecho pensional.***” (Resalto de la Sala)

Esa posición fue rectificada en sentencia reciente SL 5170 de 2021, por medio de la cual el Alto Tribunal determinó la posibilidad de pagar las mesadas pensionales desde la fecha de estructuración de la invalidez, en los eventos en que no se hayan reconocido subsidios por incapacidad, pues de ser así, el pago de la prestación se realiza a partir de la última incapacidad. Al respecto dijo:

*“Así las cosas, frente al tema del reconocimiento de la pensión de invalidez estima la Sala que el Tribunal no incurrió en ningún yerro en la intelección que asignó a los preceptos normativos enunciados cuando existen subsidios por incapacidad temporal con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, al entender que las mesadas se comienzan a pagar, de forma retroactiva, desde la data de la estructuración, **pero siempre que con posterioridad a ella no se hubieren reconocido subsidios por incapacidad**, continuos o discontinuos, evento en el cual se pagará, pero a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad.*

(...)

*Es claro entonces que, mientras el afiliado se encuentre recibiendo el subsidio por incapacidad temporal no puede percibir prestaciones derivadas de la invalidez, como son las mesadas pensionales, **cuyo pago procede una vez la entidad previsional reconozca la pensión, momento a partir del cual ya no procede el pago de las***

***incapacidades**, porque la acción protectora es asumida por otra prestación, dado el nuevo hecho que la causa – la invalidez-, siendo la razón por la cual el sistema de salud no contempla prestaciones económicas para los pensionados --Artículos 28 del Decreto 806 de 1998 y 2.1.3.6 del Decreto 780 de 2016--.*

(...)

*Teniendo en cuenta todo lo expuesto en líneas precedentes, la Sala considera necesario precisar su doctrina, en el sentido de señalar que **cuando existen subsidios por incapacidad temporal, continuos o discontinuos, con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, las mesadas pensionales se comenzarán a pagar sólo a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad**, postura con la cual queda rectificada y delineada su posición con relación a criterios anteriores que le hubieren sido contrarios (SL1562-2019). ”*

En consideración a lo anterior, considera la Sala que el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado desde el **3 de julio de 2020** como se indicó en la sentencia de primera instancia, **pues se repite, el último pago de la incapacidad tuvo lugar el 27 de abril de 2020**, ello es, con anterioridad a la fecha de estructuración.

En lo que respecta a la negativa del retroactivo pensional bajo el sustento que los certificados de incapacidades descargados de portales de internet por si solos no son válidos porque no si se desprende su autenticidad, integridad e inalterabilidad y que al demandante se le informó que debía allegar un nuevo certificado emitido por la NUEVA EPS, cumpliendo las formalidades legales sin que lo haya hecho. No se acoge dicho sustento para negar el retroactivo pensional, teniendo en cuenta que el demandante cumplió con la carga de aportar el certificado de incapacidades, al haber cumplido con la obligación probatoria de adjuntar a Colpensiones, el certificado de incapacidades, con fecha de expedición el 18 de noviembre de 2021 el cual reposa a fl 188 del expediente digital 06 y aunado a ello, al proceso aportó como anexo a la demanda un nuevo certificado de incapacidades actualizado al 23 de marzo de 2022 que reposa en el fl 14 del expediente digital 01, del que se desprende que en forma concordante, que la última incapacidad cancelada tuvo lugar el 27 de abril de 2020.

En ese orden de ideas, si nos remitimos a la norma del CGP que hace referencia a los documentos auténticos, encontramos lo siguiente:

“ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha

elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, **se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos**, según el caso. (...)” (Resalto de la Sala)

En ese sentido, el certificado de incapacidades no fue tachado de falso ni fue desconocido por la NUEVA EPS, en calidad de autora de este, en los términos del art 272 del CGP. Por el contrario, se debe adoptar como auténtico al existir certeza que el funcionario que lo elaboró fue el Sr. Cesar Alfonso Grimaldo Duque en calidad de director Prestaciones Económicas de la NUEVA EPS.

Aunado a lo anterior, considera la Sala, que al haber cumplido la parte accionante la carga de acreditar que el último pago del subsidio de incapacidad tuvo lugar hasta el mes de abril de 2020, en caso de existir duda por parte de Colpensiones frente a dichos pagos, era su responsabilidad investigar y demostrar la existencia de subsidios de incapacidad con posterioridad a la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral sin que lo haya hecho. En consecuencia, se CONFIRMA la sentencia de primera instancia en este punto.

Ahora, al revisar el retroactivo pensional reconocido en primera instancia del 3 de julio de 2020 al 31 de marzo de 2022 (día anterior a la inclusión en nómina de pensionado) a la Sala le da el mismo valor reconocido en primera instancia.

Y en este evento no operó el fenómeno de la prescripción, dado que la pensión de invalidez se reconoció en la resolución SUB 69.071 del 10 de marzo de 2022, contra dicha decisión se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales se resolvieron en forma desfavorable al actor en las resolución SUB 132.437 del 16 de mayo de 2022 y DPE 8049 de 2022 (fl. 60 del expediente digital 60); la solicitud de retroactivo pensional se elevó 24 de mayo de 2022 y fue negada en resolución SUB 248.795 del 9 de septiembre de 2022 (fl. 60 a 63) y la demanda fue presentada el 15 de noviembre de 2022, sin que haya superado los 3 años a los que hacen referencia los arts. 488 del CST y 151 del CPT y SS.

Con fundamento en lo anterior, se CONFIRMARÁ el reconocimiento del disfrute de la pensión desde la fecha de estructuración de la pérdida de la

capacidad laboral y el retroactivo pensional determinado en la sentencia de primera instancia.

2. De los intereses moratorios

En primera instancia se reconocieron los intereses moratorios argumentando que en la resolución por medio de la cual se reconoció la pensión de invalidez se hizo un reconocimiento parcial, al no incluir las mesadas pensionales desde que tenía derecho a la prestación económica. Que en aplicación de la sentencia SU 975 de 2003 dispuso que en aplicación analógica del art. 19 del Decreto 656 de 1994, es obligación que las entidades resuelvan de fondo las solicitudes en un término máximo de 4 meses desde la presentación de la solicitud, que al haberse presentado solicitud a Colpensiones el 22 de noviembre de 2021, el término para reconocer la prestación vencía el 22 de marzo de 2022, siendo a partir de esa fecha se deben reconocer los intereses moratorios.

Decisión que se CONFIRMARÁ teniendo en cuenta que la pensión de invalidez fue solicitada el **22 de noviembre de 2021** y si bien, Colpensiones dentro de los 4 meses posteriores a la reclamación en acatamiento del párrafo 1º del art. 9 de la Ley 797 de 2003, reconoció la pensión de invalidez en la resolución SUB 69.071 del 10 de marzo de 2022, lo hizo a partir de corte de nómina (1º de abril de 2022) aduciendo que se había aportado certificado sin que cuente con el nombre del funcionario que la expidió e impuso cargas al actor de aportar certificado del que se desprendiera su autenticidad, confiabilidad e inalterabilidad. No obstante, con el certificado de incapacidades aportado el demandante a Colpensiones y que reposa en el fl.188 como anexo a la contestación a la demanda, cuenta con fecha de expedición del 18 de noviembre de 2021, y allí se desprende el derecho al reconocimiento de la pensión desde la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, lo que hace que el retroactivo pensional debiera ser reconocido y se encuentra en mora desde el **23 de marzo de 2022** como se indicó en la sentencia de primera instancia.

3. De las costas procesales en primera instancia

Se CONFIRMARÁN, dando aplicación al art. 365 del CGP que expresa: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso...”, y en este evento, las

pretensiones del reconocimiento del retroactivo pensional e intereses moratorios fueron reconocidas a la parte accionante.

Costas en esta instancia, en la suma de \$1.160.000 a cargo de Colpensiones y a favor del demandante, por no haber prosperado el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, por lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia, en la suma de \$1.160.000 a cargo de Colpensiones y a favor del demandante, por no haber prosperado el recurso de apelación.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

Radicado Único Nacional 05-001-31-05-020-2022-00439-01
Radicado Interno 332-23



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE : FRANCISCO JAVIER GIRALDO BOTERO
DEMANDADO : COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL: 05-001-31-05-020-2022-00439-01
RADICADO INTERNO : 332-23
DECISIÓN : CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 14 de diciembre de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 14 de diciembre de 2023 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO